

S-2024

Procedimiento:

Demandante:

Demandada:

Radicado:

Asunto:

Ejecutivo

Jesús Elías Giraldo Gómez

Sucesores de Mario Luis Villegas Hincapié

05266 31 03 002 2019 00289 03

Confirma sentencia impugnada

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, once (11) de noviembre del dos mil veintitrés (2023).

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada frente a la sentencia fechada del 30 de agosto de 2022, mediante la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado dirimió la controversia en el proceso ejecutivo instaurado por Jesús Elías Giraldo Gómez en contra de los sucesores de Mario Luis Villegas Hincapié. Función juzgadora que se acomete en el siguiente orden:

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes. El día 25 de septiembre de 2019, el señor Jesús Elías Giraldo Gómez presentó demanda ejecutiva por incumplimiento de pago a la letra de cambio suscrita por el señor Mario Luis Villegas Hincapié el 26 de junio de 2016, quien en vida se identificaba con la cédula 3.497.043, pretendiendo que se librara mandamiento de pago en contra de los sucesores de este, por la suma de \$850.000.000, como capital insoluto representado en la letra de cambio suscrita el 26 de junio de 2016, misma con vencimiento del 26 de junio de 2019, así como por la suma de quinientos noventa millones ochenta y nueve mil ciento veinticinco pesos (\$590.089.125) por concepto de intereses moratorios contados desde el 27 de junio de 2017 hasta el 26 de septiembre de 2019.

2. Fundamentos Fácticos. Los hechos se sintetizan de la siguiente manera:

2.1. El señor Mario Luis Villegas Hincapié suscribió el 26 de junio de 2016 una letra de cambio por valor de ochocientos cincuenta millones de pesos (\$850.000.000) título valor que se anexa. El dinero que daba origen al título debía pagarse el 26 de junio de 2019. El acreedor original del título era el señor Luis Enrique Gómez Giraldo, quien endosó el título en propiedad al actual demandante Jesús Elías Giraldo Gómez.

2.2. Los intereses corrientes fueron pactados al 2% mensual que debían pagarse mes vencido, los días 26 de cada mes. El señor Mario Luis Villegas Hincapié pagó los intereses hasta el día 26 de junio de 2017.

2.3. El señor Mario Luis Villegas Hincapié falleció el 15 de agosto de 2017 y los herederos determinados son: Yensi Viviana Villegas Vallejo, Isabel Cristina Villegas Vallejo y Carlos Mario Villegas Vallejo, la sucesión del difunto Mario Luis Villegas Hincapié no se ha iniciado.

3. Actuación procesal. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado libró mandamiento en la forma legalmente considerada, por lo que solamente libró mandamiento de pago por el capital e intereses de plazo del 26 de junio del 2017 al 26 de junio del 2019 y de mora solamente a partir del 27 de junio del 2019. Así reza textualmente el mandamiento de pago:

-Por la suma de \$850.000.000, correspondientes al capital contenido en la letra de cambio obrante a folio 5 del cuaderno I; mas los intereses moratorios sobre el anterior capital, a la tasa máxima legal permitida por la Superfinanciera, liquidados mes a mes, desde el 27 de junio de 2019, hasta que se verifique el pago de la obligación.

-Por los intereses de plazo causados sobre el anterior capital entre el 27 de junio de 2017 y el 26 de junio de 2019, a la tasa pactada del 2% mensual.

De este modo, ordenó su notificación a la parte demandada y el emplazamiento de los herederos indeterminados del señor Mario Luis Villegas Hincapié.

4. Oposición de la demanda. 4.1. El codemandado **Carlos Mario Villegas Vallejo** adujo no tener conocimiento sobre la suscripción del título valor ni sobre los intereses cancelados hasta el 26 junio de 2017 y formuló las excepciones que denominó: **i)** inexistencia de negocio causal; **ii)** mala fe y temeridad; **iii)** cobro de lo no debido.

4.2. La codemandada **Isabel Cristina Villegas Vallejo** contestó la demanda, sin embargo, su defensa no se tuvo en la cuenta por haber llegado extemporáneamente al proceso.

4.3. La señora **María Rubiela Vallejo Galeano** llegó al proceso a señalar que en calidad de cónyuge supérstite estaba legitimada para intervenir, de esta manera, adujo en un primer momento que no le constaba ni la fecha de suscripción del

respectivo título valor, ni tampoco el valor de mismo y menos la autenticidad de la firma del señor Mario Luis Villegas Hincapié. Además, desconoció el negocio causal que originó la creación del título, habida cuenta que el señor Mario Luis Villegas Hincapié nunca recibió tal suma de dinero.

Seguidamente, formuló las siguientes excepciones **i)** inexistencia del Negocio jurídico subyacente; **ii)** inexistencia de la obligación; **iii)** suma de dinero no entregada al deudor; **iv)** cobro de lo no debido; **v)** lleno sin instrucciones del título valor; **vi)** tacha de falsedad; **vii)** enriquecimiento sin justa causa, **viii)** demanda temeraria y mala fe de la demandante y **ix)** la innominada.

Posteriormente, a través de nuevo apoderado, desistió de las pruebas solicitadas y de la tacha de falsedad propuesta, así mismo, se retractó de la contestación inicial para admitir que los negocios que dieron lugar a la letra de cambio fueron reales y que se allanaba a las pretensiones de la demanda.

4.4. La codemandada **Yensi Viviana Villegas Vallejo** no contestó la demanda.

4.5. La curadora *ad litem* de los indeterminados, adujo carencia de elementos para oponerse a las pretensiones de la demanda, por desconocer los pormenores de los negocios realizados entre demandante y demandados y que dieron origen al título valor que por medio de este proceso se pretenden cobrar.

5. La sentencia impugnada. Agotado el trámite probatorio y legal pertinente, el juez *a-quo* profirió sentencia el pasado 30 de agosto de 2022, en la que declaró **no** probadas las excepciones formuladas y, en consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución “...*en contra de los herederos de MARIO LUIS VILLEGAS HINCAPIÉ, representado en este proceso por sus hijos YENSY VIVIANA VILLEGAS VALLEJO, ISABEL CRISTINA VILLEGAS VALLEJO y CARLOS MARIO VILLEGAS VALLEJO y como cónyuge la señora MARIA RUBIELA VALLEJO GALEANO y en favor del señor JESUS ELIAS GIRALDO GÓMEZ; conforme al mandamiento de pago, para que con el producto del remate de los bienes embargados, secuestrados y avaluados, o que lleguen a estarlo, se paguen el crédito y las costas*”

Luego de una semblanza de los hechos y pretensiones de la demanda, comenzó el *a quo* por estudiar los elementos del título valor que se cobra, encontrando acreditados los requisitos generales anclados en el artículo 621 y los particulares

establecidos en el artículo 671 del Código de Comercio, en relación con la claridad, expresitud y exigibilidad de la letra de cambio, los cuales, pretenden ser enervados por la parte demandada, a partir de las excepciones derivadas del negocio causal.

De este modo indicó que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en el título valor y de su intención de hacerlo negociable y, por ende, el señor Mario Luis Villegas Hincapié al suscribir la letra de cambio adquirió una obligación cambiaria. Por ahí mismo, halló que Luis Enrique Gómez Giraldo -quien recibió la letra de cambio inicialmente-, la endosó sin ninguna restricción al señor Jesús Elías Giraldo Gómez aquí demandante, por lo que debe entenderse que en tal condición se presume que este ostenta la calidad de tenedor legítimo.

Refiriéndose a los endosos que constaban en el dorso de la letra de cambio, señaló que en realidad existían dos, uno en propiedad realizado por Luis Enrique Gómez Giraldo a Jesús Elías Giraldo Gómez y otro “en procuración” o “al cobro” realizado por este último para que su abogado la cobrara. Advirtió, que si bien el primer endoso no tenía fecha, el punto lo resolvía el artículo 660 del Código de Comercio, normativa que presumía como fecha del endoso el día de la entrega del título valor al endosatario, lo que enseguida relacionó con lo expuesto por el demandante en su interrogatorio acerca de que el señor Luis Enrique Gómez le entregó la letra en el año 2018, fecha que era anterior al vencimiento de la cambial en junio de 2019, sin que se tuviera elemento de prueba para considerar que se trató de una cesión y por esa vía se le pudieran enrostrar las excepciones derivadas del negocio causal.

Retomó el estudio de la naturaleza de los endosos para señalar que *“...aquí es claro que están dos firmas, una primera, en el primer endoso, donde el señor Enrique Giraldo Gómez, le endosó a Jesús Elías y existe una segunda firma, cada firma, es la que permite entender que son dos endosos totalmente independientes y que son dos endosos que se ajustan a estas exigencia mínimas que impone el artículo 654 del Código de Comercio y ese segundo endoso dice “endoso en procuración” de tal manera que Jesús Elías Giraldo Gómez recibió la letra de cambio mediante endoso en propiedad y de esa manera, como ha insistido en sus alegaciones el apoderado de la parte demandante al recibir esa letra por endoso en propiedad no le son oponibles las excepciones que se tenía con el obligado en el negocio causal...”*. Acotó, entonces el funcionario a quo, que la calidad de tenedor legítimo del ejecutante tampoco fue desvirtuada, exaltando los principios

de incorporación, literalidad, legitimación y autonomía que revisten a los títulos valores como prueba de un derecho de crédito y, en consecuencia, de su exigibilidad, sin que pudieran ser escuchadas las excepciones personales y causales que se lanzaron contra el demandante.

Por último, ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago.

6. El recurso de apelación. La parte ejecutada recurrió la sentencia.

6.1. El señor **Carlos Mario Villegas Vallejo** adujo que el endoso que corresponde al título presentado es en procuración, al cobro o judicial, el cual se encuentra regulado en los artículos 656 y 658 del Código de Comercio y este no transfiere la propiedad sobre el título, si no que le permite cobrarlo, por ende, alude a que el juez erró al establecer que el demandante en el proceso de la referencia, aceptó el título valor en forma plena y no conforme a la literalidad del título establecía, es decir, como endosatario al cobro, todo para señalar que sí le caben las excepciones causales derivadas del negocio jurídico propuestas con la contestación de la demanda.

Por ello, agregó, que en ninguna parte se señaló la fecha del endoso, lo que era importante para determinar si fue antes o después del vencimiento que el endoso ocurrió, pues en este último caso, se podrían proponer las excepciones causales derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación del título valor, destacando que dentro *“...de la práctica probatoria que se gestó en la audiencia celebrada el día 30 de agosto de 2022, dentro del interrogatorio absuelto por el demandante, se logró explicar que la letra le fue endosada en el año 2018, sin embargo, no se logró precisar la fecha exacta de dicho endoso...”*.

Culminó señalando entonces que *“...la fecha del endoso se debe tomar como la fecha de presentación de la demanda y al tomarse esta fecha, se puede observar palmariamente, que se presentó luego de la exigibilidad de la obligación cambiaria, luego, nuevamente sí era posible presentar las excepciones causales derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación del título valor letra de cambio...”*

6.2. En términos similares apelaron las codemandadas **Isabel Cristina y Yensy Viviana Villegas Vallejo**, para reiterar que sí le pueden formular las excepciones derivadas del negocio causal en tanto que *“...el señor **Jesús Elías Giraldo***

Gómez, aceptó el título valor letra de cambio, como endosatario al cobro y/o en procuración, y no en forma plena. No tiene sentido que hubiese colocado literalmente en el texto del título valor la expresión: “Endoso al cobro judicial”, antes de firmarla, lo que indica que su aceptación lo fue en este sentido y no otro, entre otras razones porque no señaló tampoco a quien se lo endosaba al cobro judicial si esa hubiese querido ser su voluntad. En el título valor se incorporó, dada su literalidad un “Endoso al cobro judicial”, por lo que el tenedor solo puede reclamar lo que conste en él y nada más.

Reiteran que no se puede aceptar como lo hizo el despacho, que haya tomado como fecha del endoso el año 2018, como lo atestó el demandante, porque este hecho no le es desfavorable en modo alguno, por ende, debe tomarse entonces como fecha del endoso la fecha de presentación de la demanda y al tomarse esta fecha, se puede observar que se presentó luego de la exigibilidad de la obligación cambiaria y por ende, se le pueden formular las excepciones derivadas del negocio causal “...Es así como no se tuvo en cuenta que se adosó en copia digital, un documento, consistente en un contrato que palabras más palabras menos, hace relación al arrendamiento de unos derechos hereditarios sobre la explotación del ingreso a la denominada Piedra del Peñon de Guatapé. Documento que no pudo ser valorado, y explicaría que si se entregó dinero fue por esta circunstancia y que no existe causa del título, ya que nunca se prestó dinero...”

Por demás, adujo que no era procedente aceptar el allanamiento que de la demanda hizo la cónyuge sobreviviente María Rubiela Vallejo Galeano, ya que eso le implica asumir el 50% de las deudas de su difunto esposo y “...si la prueba es del proceso, por tratarse de un litisconsorcio necesario, tampoco era procedente dejar de decretar las pruebas pedidas por el apoderado inicial de la señora: MARÍA RUBIELA VALLEJO GALEANO, en la medida que sean conducentes y pertinentes y su no práctica la perjudican a ella y a los demás demandados. Pero asumiendo que pudo ser procedente aceptar el allanamiento de las pretensiones de la demanda y por ende el desistimiento de las pruebas, debió el señor Juez, como se le había solicitado expresamente aquí, que las decretara de oficio para esclarecer los hechos objeto...”. Advirtió el hecho de una posible colusión de la señora María Rubiela Vallejo Galeano con el apoderado de la parte ejecutante, en virtud de la iniciación de otros procesos y por lo sorpresivo del allanamiento a las pretensiones de la demanda ejecutiva singular, en detrimento de sus propios intereses y sin explicación alguna de su parte.

Estos argumentos fueron reiterados en segunda instancia por parte de estas últimas codemandadas y pese a que el señor Carlos Mario Villegas Vallejo no recorrió el término de traslado otorgado en segunda instancia, se atenderá lo planteado por él desde la primera instancia como una sustentación anticipada, en aplicación del precedente vertical de la Corte Constitucional vertido en la sentencia **T-310 de 2023**.

Esbozados de esta manera los antecedentes que dieron lugar a la decisión recurrida y las razones de disenso que sustentan la alzada, procede la Sala a desatar el recurso con fundamento en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales. Encuentra la Sala satisfechos los requisitos o presupuestos procesales para que pueda abordarse el estudio de la apelación interpuesta por la parte demandada, además, que no se observan irregularidades procesales que tipifiquen una nulidad.

2. De la letra de cambio como elemento axiológico de la pretensión ejecutiva. El artículo 422 del C. G. del P., prevé la necesidad de un título ejecutivo como presupuesto formal para legitimar el ejercicio de la acción ejecutiva. El artículo 676 del Código de Comercio preceptúa: *“La letra de cambio puede girarse a la orden o a cargo del mismo girador. En este último caso, el girador quedará obligado como aceptante...”*. De contera, palmar es que con sujeción a dicha norma pueden perfectamente converger en una sola persona, como ocurre en este caso, las calidades de girador y girado, así que, en esa circunstancia, el girador o creador queda obligado como aceptante, situación que torna innecesario una multiplicidad de firmas en el cartular.

Siguiendo esa línea, dos condiciones se derivan de aquel artículo para predicar el carácter de título ejecutivo de cualquier documento esgrimido como basilar de ejecución. Las primeras de tipo material, consistentes en la existencia de un documento proveniente de la demandada, una sentencia de condena en contra del mismo u otra providencia judicial con fuerza ejecutiva. Y las segundas, de contenido sustancial del documento, indicando la norma *ibídem* que debe contener una *“obligación clara, expresa y exigible”*, a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, lo que logra observarse precisamente en la letra de cambio anexada al presente proceso.

Frente a estos últimos requisitos, se tiene dicho por doctrina y jurisprudencia, que por **expresa** se entiende aquello consignado en el mismo documento y que surge nítido de su redacción; aquello que no necesita mayores interpretaciones o acudir a documentos distintos al mismo título para su entendimiento.

En lo que respecta a la **claridad**, esta hace referencia tanto a la inteligibilidad del texto del título como de la obligación contraída. Y, finalmente, en cuanto a que la obligación sea **actualmente exigible**, ésta se concreta al que no esté pendiente al cumplimiento de un plazo o una condición, bien por tratarse de una obligación pura y simple, ora, porque pese haberse pactado plazo o condición, éste llegó o aquélla se cumplió, dando lugar a la exigencia de la cambial.

3. Del principio de autonomía en los títulos valores. Naturaleza, función y aplicación. El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como los *“documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora”*. A partir de esa definición legal, la doctrina mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de los títulos valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía.

En ese mismo sentido, bajo el imperio de los ritos comerciales, ha sido copiosa tanto la doctrina como la jurisprudencia al otorgarle un carácter principalístico a tales elementos, dentro de los cuales destacamos el de la autonomía, bajo esta connotación, dicho principio versa sobre el ejercicio independiente del derecho incorporado en el título valor, por parte de su tenedor legítimo.

A su vez, estas consideraciones resultan armónicas con lo preceptuado por el artículo 627 del Código de Comercio, el cual dispone que *“**Todo suscriptor de un título valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios, no afectarán las obligaciones de los demás.**”*

Conforme lo expuesto, cabe aclarar que en la relación documental o cartular se descubre, entre sus intervinientes, la doble relación jurídica, así, una relación causal, básica o fundamental, que es el negocio jurídico subyacente que generó la relación entre las partes, que puede ser una compraventa, un mutuo, una donación, etc. y, por otra parte, una relación cartular, resultante del documento emitido con características y efectos propios que origina acciones también diversas de las que resultan de la relación fundamental o básica, precisamente es

aquí donde opera en toda su lucidez el principio de la autonomía, por eso con toda razón, ha dicho el maestro Bernardo Trujillo:

*“La autonomía activa. Por este aspecto, la autonomía emerge de la propia definición de título valor (art. 619). Ella no es otra cosa que la facultad de recibir y **poder ejercer un derecho cartular originario y no derivado del endosante**...”¹*

4. El endoso con efectos de cesión. La figura del endoso se presenta en nuestro derecho cambiario como la forma en que el endosante transfiere a otra persona llamada endosatario, los derechos consignados en el título valor nominativo o la orden, pasando a ocupar la calidad de tenedor y por tanto legitimado para el ejercicio de las acciones directas y de regreso, materializando con ello los tan relevantes principios de circulación y autonomía, que impiden en comienzo la formulación de las excepciones derivadas del negocio causal por parte del girado aceptante, salvo en los casos en que el endoso se realice con posterioridad a la fecha de vencimiento, pues, en esta hipótesis, según lo prevé el artículo 660 del Co. de Co., la transferencia deja de ostentar los atributos inherentes al endoso mercantil, **para pasar a tener los efectos únicos y exclusivos de la cesión ordinaria**, entre los que se cuenta la posibilidad de blandir contra el endosatario todas las excepciones personales y causales que hubiere podido proponer el deudor al cedente o endosante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1718 Código Civil, y lo prohijado de antaño por la Corte Suprema de Justicia, en cuanto afirmó que:

“El deudor tiene entonces el derecho de alegar contra el cesionario todo lo que hubiera podido alegar contra el cedente, inclusive la no existencia o la invalidez de la obligación que se le cobra, pero no puede tenerlo para discutir la validez del contrato celebrado entre cedente y cesionario, porque no es parte en él, ni ese contrato lo perjudica, toda vez que la obligación contraída no se hace más gravosa para el deudor, ni éste tiene interés en no realizar el pago, ni en hacerlo a determinada persona, sino en verificarlo bien, para obtener la solución de la deuda. En consecuencia, no siendo el deudor parte en el contrato celebrado entre cedente y cesionario, no puede ejercitar la acción que para las partes consagra el artículo 1743 del C.C., ni le asiste el derecho de alegar la nulidad relativa de él, la cual sólo cabe alegarse, según dicho artículo, por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, por sus herederos o cesionarios.”²

Queda claro, entonces, que al vencimiento del plazo en los títulos valores, pierden éstos la facultad de circular cambiariamente, por lo que cualquier endoso que ocurra a posteriori tendrá los efectos de una cesión ordinaria, lo que de contera

¹. TRUJILLO, Bernardo. De los Títulos Valores. Tomo I, parte general, décimasexta edición. Pág., 63

². Corte Suprema de Justicia. Gaceta Judicial LII. Páginas 1 a 12. Sala de Casación Civil. Julio 31 de 1941. Magistrado Ponente: Isaías Cepeda.

implica que el nuevo adquirente no queda cobijado bajo el principio de la autonomía, exponiéndose a que el deudor le pueda proponer todas las excepciones que le hubieren sido oponibles al cedente, como vienen a serlo amén de las reales, todas las excepciones personales y causales que quepan en cada caso concreto.

4.1. Aprecia desde ahora el tribunal que, si como aquí ocurrió, que se presentó el título valor para el cobro, pero sin la fecha del endoso, entonces, ha de acudir a lo que dispone el artículo 660 del Co. de Co. ya citado, que a la letra reza: *“Cuando en el endoso se omite la fecha, se presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo entrega del mismo al endosatario”*.

Ahora se pregunta el Tribunal si el endosatario demandante corre con la carga de probar cuándo ocurrió la entrega y la respuesta es que no, puesto que en el escenario que se presente el título para el cobro coercitivo sin la fecha del endoso, entonces se presume que ella ocurrió el día de la entrega, sin que el juez pueda inadmitir la demanda porque falte esa información en el título valor, pues, es el demandado a quien corresponde desplegar todas sus armas defensivas para tratar de demostrar que el endoso fue posterior al vencimiento del título, porque es a él y únicamente a él a quien le interesa y conviene que se tenga dicho endoso como una cesión ordinaria, para así poder proponer al endosatario todas las excepciones personales que le habría podido proponer al endosante.

Y para reforzar la tesis, bástenos con citar al tratadista José Vicente Andrade Otaiza, quien de manera contundente tiene dicho al respecto:

“El endoso siempre debe contener la fecha en que se realiza, requisito exigido para saber si produce efectos de cesión de crédito o de endoso. **Como la fecha del endoso es un requisito suplido por la ley, al no indicarla, el que alegue la producción de los efectos de cesión deberá acreditar que la negociación del título se llevó a cabo con posterioridad al vencimiento.**³
(subrayado y resaltado no original)

Por su parte el destacado tratadista Lisandro Peña Nossa en su destacada obra “De Los Títulos Valores”, en su Sexta Edición, pág. 87, hace el siguiente aporte al tema:

3.5 Fecha del endoso y nombre del endosatario

³José Vicente Andrade Otaiza, Colección JUS PRIVADO, universidad Católica de Colombia, Pág 139

El primero de los elementos mencionados, es decir la fecha, no es esencial para la existencia del endoso; en caso de faltar, el art. 660 trae la solución al respecto como norma supletoria que es, especificando que a falta de fecha o cuando ésta se omita, se presume que la fecha del endoso es la misma en que se verificó la entrega del título valor por parte del endosante al endosatario. Aparentemente la fecha no tendría valor alguno, sin embargo, al establecerla como factor comparativo con la fecha de vencimiento del título se halla su importancia, aspecto que trataremos cuando veamos el endoso propio e impropio. Por otro lado, el nombre del endosatario tampoco es esencial a la existencia del endoso, pues de faltar aquel, simplemente estaríamos frente a un endoso en blanco con las características y los efectos que se aplican más adelante.

4.3. Endoso propio e impropio o posterior al vencimiento

En la transferencia de un título valor a la orden, reviste especial importancia la fecha del endoso, a la luz del art. 660, el cual señala que el endoso posterior a la fecha de vencimiento, produce los efectos de una cesión ordinaria, esto es, si se hace antes, el título valor a la orden conserva todos sus efectos cambiarios; **pero si es posterior a su vencimiento, lo cual debe probarse, si la fecha del endoso no aparece en el título, produce los efectos de la cesión ordinaria de créditos regulada por los arts. 1559 y siguientes del Código Civil;** en el primer caso el endoso se denomina propio (antes del vencimiento) y en el segundo, impropio (después del vencimiento)” (resaltado no original)”

Como puede verse, cada uno de los doctrinantes a su manera son contundentes en dar a entender que si bien la falta de la fecha del endoso en el título valor no es un requisito de su esencia o sustancial, de todas maneras cumple la tarea de fijar la época en que se hizo el endoso, por lo que ante su ausencia la ley presume que lo fue en la misma fecha de la entrega; sin embargo, ambos coinciden en admitir que es el deudor o quien pretenda beneficiarse de esa situación el que debe probar, luego, entonces, siendo posible que se presente por el endosatario el título para el cobro judicial sin la fecha del endoso, sin que se le puede exigir que pruebe cuándo ocurrió la entrega, por consiguiente, es el deudor que quiere proponer las excepciones personales que le habría podido proponer al girador, quien corre con la carga de la prueba, misma que siempre la tendrá el demandado o ejecutado y que no el demandante, como es lo lógico.

Más adelante, el mismo doctrinante Peña Nossa en la citada obra, trajo a cita una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que coincide con las apreciaciones de los doctrinantes citados, con ponencia del destacado exmagistrado César Julio Valencia Copete, quien luego fuera miembro de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de la cual se extrae lo siguiente:

Reviste importancia aclarar e insistir en que el art. 660 hace aplicable al endoso impropio o posterior al vencimiento, los efectos de una cesión ordinaria, ya explicados y no los requisitos de notificación o aceptación *del* endoso por parte del deudor; en este sentido el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, sala civil señala: ...8. Aclarando lo anterior, debe abordar enseguida el Tribunal el examen de la primera excepción de fondo, denominada falta de *legitimación en la causa*, fundada, según se vio en los antecedentes que se dejaron extractados, en que, como se endosaron las facturas en fecha posterior a la de su vencimiento no se perfeccionó la cesión por no habersele notificado al deudor, sin que, por lo mismo, pudiera haber ocurrido la entrega material de los títulos por parte del cedente al cesionario, debido a que los originales los tiene la demandada Altanare.

Sobre el particular, ha de decirse que como el hecho mencionado anteriormente se encuentra enmarcado dentro de la previsión contenida en el artículo 660, *in fine*, del Código de Comercio, según el cual, *el endoso posterior al vencimiento del título produce los efectos de una cesión ordinaria*, corresponde entonces a la Corporación, precisar como reiteradamente en providencias anteriores lo ha dicho, que la norma no consagra que el acto de transmisión así realizado convierta, desde el punto de vista formal, al endoso en una cesión ordinaria sujeta a las formalidades indicadas en los artículos 1959, 1960 y 1961 del Código Civil, entre las que se requieren, para que produzca efectos, la notificación al deudor y su correspondiente aceptación, toda vez que la verdadera interpretación de la disposición, lo que prevé, es una asimilación o semejanza entre dos actos, pero únicamente en cuanto a que cualquier tenedor posterior que así reciba el título queda sujeto a las excepciones que pudiera proponerle el obligado cambiario, quebrándose así, por excepción, el principio de la autonomía que preside esta materia.

Acerca del punto, también ha expuesto la doctrina que en esta especial situación no opera la protección tutelar que otorga la autonomía, pues las ventajas que el derecho cambiario da, *no se transmiten al endosatario posterior al vencimiento que, estando equiparado al cesionario, ejercita los derechos que correspondían al cedente... En efecto, la ley equipara el endoso póstumo a una cesión, en los efectos, pero no en la forma...* (César Vivante, Tratado de Derecho Mercantil, volumen III, 1ª edición, p. 310).

Tras observar la Sala que, de un lado, al no estar acreditado que las facturas fuesen endosadas en época posterior a la de la exacción ha de suponerse, conforme al inciso 1º del artículo 660 del C. de C., que lo fue antes del vencimiento, y que, de otra parte, tal cual se expuso al inicio de estas consideraciones, la demandante adujo los ejemplares exigidos por la ley, ha de expresar a continuación que, de admitirse en vía de discusión que el acto de transmisión se hubiera hecho después, en todo caso no era menester notificarle a la parte demandada la transferencia de los títulos, pues la consecuencia de esa negociación tardía, se orienta en la dirección indicada por la doctrina y la jurisprudencia, distinta a la alegada por el recurrente. (resalto y subrayado no originales)

Este mismo razonamiento permite de paso afirmar que al no haber necesidad de comunicar al deudor dicha transferencia del título valor, nada de raro tiene, en esta materia, que la deudora desconozca al endosatario CESAR A. SOLANO SÁNCHEZ, por supuesto que quien suscribe como obligado cambiario, un documento de este linaje, con su sola firma compromete su responsabilidad tanto frente a la parte con quien directamente negoció como

también ante las demás personas que posteriormente lo adquieran, según la ley de circulación prevenida en el Código de Comercio. (Sentencia del 5 de febrero de 1997, Magistrado Ponente César Julio Valencia Copete. Ejecutivo de César A. Solano Sánchez, contra Altanare Ltda y Districlaro Ltda.).

Destaca ahora el tribunal cómo nuestro homólogo de Santa fe de Bogotá en la sentencia citada sentenció, que como no se pudo demostrar que las facturas hubiesen sido endosadas con posterioridad al vencimiento, luego, entonces, asumió que de conformidad con el artículo 660 del Código de Comercio debía presumirse que fueron endosadas con anterioridad, tesis que será acogida por el Tribunal para la solución del presente caso, pues es la más prístina interpretación del artículo 660 del Código del Comercio.

Y es que resultaría un contrasentido exigir que sea el demandante quien pruebe que el título valor le fue entregado antes del vencimiento porque él simplemente cumple con presentar el título con el endoso que lo legitime como tenedor legítimo, caso en el cual será el demandado o ejecutado quien deba averiguar cuándo ocurrió la entrega del título, para lo cual podrá interrogar al demandante para obtener la confesión, pero si el demandante simplemente afirma que la entrega ocurrió antes del vencimiento, esa declaración de parte es suficiente para creer que así ocurrió porque se supone que está obrando de buena fe y así lo presume el artículo 835 del Co. de Co., si a pesar de ello, el ejecutado persiste en que el endoso ocurrió o debió ocurrir después del vencimiento, entonces, es él y sólo él quien tiene la carga de probar lo que afirma, como se lo manda el art. 835 ya citado.

En conclusión, para la Sala no cabe duda que esa carga probatoria la tiene es el demandado, simplemente porque la presunción de que se trata no sanciona la falta de fecha del endoso con que se presume endosado después del vencimiento sino antes; por consiguiente, es al deudor demandado al que le corresponde probar que el endoso fue posterior al vencimiento, porque es a quien le interesa beneficiarse de la regla contenida en el artículo 660 del Código del Comercio, precisamente, para poder quitarle al cartular las ventajas que da la ley de circulación como la autonomía al título valor y por ahí mismo poder proponer al endosatario demandante las excepciones personales que habría podido proponer al endosante, quedando en este sentido explicado lo de la carga de la prueba en estos casos.

Por último, no sobra mencionar que cuando el endoso ocurre luego del vencimiento, el deudor puede proponer al cesionario todas las excepciones personales y causales, como si se tratara de alegarlas en frente del cedente, entonces, **asume la carga de no solamente perfilar en forma adecuada la excepción de que se trata, sino que debe probar que ese hecho -del endoso- ocurrió luego del vencimiento, para que pueda beneficiarse de los efectos de una cesión ordinaria**, con las consabidas repercusiones para la validez o fuerza coactiva del título valor que se pretende cobrar.

Mutatis mutandis, es posible aplicar a la presente tesis el precedente judicial de la Corte Constitucional, Corporado que en una acción de tutela en materia de títulos valores exigió que siempre sería el demandado quien tiene a hombros probar las excepciones cambiarias y las del negocio jurídico subyacente, sin que en ningún caso pueda trasladar al ejecutante la prueba de los hechos que afirma en la contestación de la demanda, como pretende hacerlo aquí el demandado, quien se queja de que el demandante no confesó que había adquirido el pagaré después de su vencimiento, cuando él simplemente declaró que lo había recibido antes y por eso era de la carga de la prueba del demandado demostrar lo contrario. Esto dijo la Corte respecto la carga de la prueba del demandado:

“...los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, **si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción.**”

“...si el deudor decide presentar excepciones en contra del mandamiento ejecutivo, fundadas en asuntos derivados del negocio subyacente, tiene la carga de probar cómo esos asuntos inciden en la exigibilidad del crédito incorporado al título valor. Ello por una razón simple: la obligación crediticia está contenida en el título valor de forma autónoma y literal, por lo que, *prima facie*, faculta al acreedor cambiario para exigir su pago al deudor. Considerar lo contrario, esto es, que la simple declaración del deudor sobre el no pago del importe lo exime de probar **la incidencia del negocio subyacente en la exigibilidad de las obligaciones del título valor**, trasladándose dicha carga al acreedor, **desconocería la naturaleza jurídica esencial de la acción cambiaria**. En efecto, esta acción parte de reconocer la existencia de un documento que incorpora autónomamente un derecho de crédito –título valor– que resulta exigible por parte de su tenedor legítimo en contra del obligado cambiario. Por ende, **la exhibición del título, aunada al cumplimiento de la ley de circulación, son suficientes para lograr la**

exigibilidad de la obligación cartular. Si se llegare a concluir que es al acreedor al que le corresponde probar el perfeccionamiento del negocio subyacente, ya no podría predicarse la existencia de un proceso de ejecución, sino de uno de carácter declarativo. Profundo desquiciamiento de la naturaleza jurídica de los procesos y de la noción de lo que es una negación indefinida...”⁴ (Negrillas intencionales).

Finalmente, para que el demandado pueda proponer al endosatario ejecutante las excepciones causales o personales debe probar primero que el título valor que se le cobra fue endosado después del vencimiento, pues, de lo contrario, habrá de presumirse que el endoso ocurrió antes del vencimiento, como es lo lógico y ya no podría presentar las excepciones que se comentan, porque el título sigue amparado bajo el principio de la literalidad y la autonomía.

5. Planteamiento del caso. El derecho debatido por la parte ejecutada en este segundo grado de conocimiento, concierne a que la declaratoria de la excepción derivada del negocio causal tenía plena cabida, por cuanto el demandante no funge como endosatario en propiedad como lo dedujo el juez *a quo*, sino como un representante del endosante, sea por la cláusula “*endoso al cobro judicial*” que aparece al dorso del pagaré, ora porque ese acto no tiene fecha, debiéndose tener como tal, la fecha en que presentó la demanda -25 de septiembre de 2019-, misma que resulta ser posterior al vencimiento de la letra de cambio -junio 26 de 2019-, sin que pueda aceptarse el dicho de la parte demandante, cuando afirma que le fue endosado en el año 2018, pues ello no cumple con los requisitos de la confesión, esto es, no le es desfavorable al confesante, de modo que los efectos de tal transferencia serían los de cesión y que a él se extienden, por ende, pueden oponérsele las excepciones nacidas del negocio causal que dio origen a la cartular, cuyo estudio fue omitido por el *a quo*.

5.1. Al analizar de forma integral los argumentos que componen el recurso de apelación y, en general, todo el *iter* procesal, el Tribunal encuentra acertada la decisión final del *a quo* de continuar con la ejecución, para lo cual ex ante realizó un juicio de valor adecuado sobre los efectos y alcances de las firmas plasmadas en el reverso del título valor, razón por la cual se acompañará esa determinación, pues, en verdad, pese a las dos firmas que aparecen allí, la cadena de endosos se conformó como lo indica la ley mercantil, produciendo los efectos cambiarios de un endoso en propiedad.

⁴. Corte Constitucional. Sentencia T-310 de 2009.

5.2. Vemos que en el anverso y reverso del título se contempla lo siguiente:

Letra de Cambio
(Sin Protesto)

No. [Redacted] Por \$ 850.000.000

Señor Mario Luis Villegas Hincapié

El día 26 de Junio del año 2016 se servirá usted pagar solidariamente

en Envigado a la orden de Juiss Enrique Giraldo Gómez

Exactos Ochocientos cincuenta millones

Pesos moneda legal, mas intereses por retardo a % mensual todas las partes de esta letra quedan obligadas solidariamente y renuncian a la presentación para la aceptación y el pago a los avisos de rechazo.

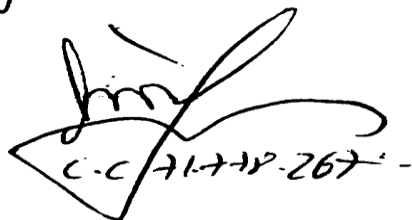
interés corriente 2% mensual

Envigado Junio 26 Del año 2016


Ciudad Fecha

Sus S.S. Sonia Asconine U.

- Yo - Juiss Enrique Giraldo Gómez endoso a
Jesús Elías Giraldo


C.C. 11.770.267

Endoso al cobro
Judicial.



5.3. Claro refulege que el título valor concierne a la letra de cambio sin número, signada por el señor Mario Luis Villegas Hincapié, como girador-aceptante a la orden del señor Luis Enrique Giraldo Gómez, este último, plasmó su rúbrica en el reverso del título y precisó “endoso a Jesús Elías Giraldo Gómez” para que se tuviera como adquirente en propiedad, recordemos que para que esto ocurra, no se requiere de calificativos, de indicaciones, cláusulas o menciones especiales, bastará simplemente que el endosante se limite a endosar como lo hizo el señor Luis Enrique, de suerte que, ante la falta de adjetivos calificativos en uno u otro sentido, era el endosatario Jesús Elías Giraldo quien en adelante ostentaría la propiedad sobre ese bien mercantil -art. 658 Código De Comercio-.

5.4. Ahora, fácil era verificar que el señor Jesús Elías Giraldo Gómez, como dueño del cartular y de los derechos en él incorporados, podía disponer de él libremente, transfiriéndolo en propiedad, endosándolo en procuración -como parece que pretendió hacerlo al otearse su firma con esa cláusula- o, simplemente, optando por cobrarlo judicialmente él mismo, como a la postre terminó haciéndolo ya que al operar la autonomía el derecho empezó en él, es la interpretación que más se acompasa con la secuencia de firmas que constan en la cambial y que, en modo alguno logran hacer sucumbir la naturaleza jurídica, cadena y finalidad de esos endosos, como parece entenderlo la parte recurrente.

5.5. Ahora, es cierto que para que una transferencia por endoso surta plenos efectos es necesario que la misma se sitúe antes del vencimiento del respectivo título valor, al que se realiza con posterioridad, la doctrina⁵ lo ha denominado transferencia "anómala" como endoso impropio y, según vimos, en el marco de la negación de la exigibilidad del título es el ejecutado quien debe probar, mínimo, dos aspectos trascendentales si es que pretende lograr que el brocardo de la autonomía y abstracción se rompan, o cuando menos, se relativicen:

En primer lugar, que el endoso efectivamente fue posterior, para lo cual, según la sentencia extractada *ut supra*, **la parte interesada ha de hacer uso de los medios de prueba que estime conducentes, pertinentes, necesarios e idóneos para demostrar su dicho**, entre los que se encuentra la confesión que pueda efectuar el adquirente del título valor sobre la calenda en que se efectuó el endoso y un posible dolo o ausencia de buena fe exenta de culpa, al tenor de las normas aplicables a este tipo de prueba, consignadas en los artículos 191 y s.s. del C. G. del P.

En segundo lugar, es necesario que la prueba sea de tal entidad que permita inferir razonablemente que -pese al tenor literal de los carturales-, las normas que le son aplicables en realidad son las del negocio jurídico que se alega como causal, aspecto que requiere **que el ejecutado compruebe el lazo común entre dicho negocio y la creación de los títulos valores**, ya que en modo alguno puede el juez conjeturar sobre el negocio jurídico, pues nada sabe ni le consta sobre si existían otras negociaciones entre las partes que dieron lugar a la creación de la cambial.

⁵ Ver. entre otros Trujillo. B. De *los títulos valores*, Tomo 1. Parte General. 17° Ed. Leyer, Bogotá, 2010 y PEÑA NOSSA. L. De *títulos valores*, 6° Ed, Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 1996.

5.6. Ninguna de estas cargas fue cumplida por la parte ejecutada recurrente, puesto que sólo se aferran al argumento de que la ausencia de fecha del endoso traduce que su transferencia se hizo con la presentación de la demanda, pero olvidan que el artículo 660 del Código de Comercio crea la regla supletoria para cuando se omita la fecha de endoso, señalando que: se *“presumirá que el título fue endosado el día en que el endosante hizo entrega del mismo al endosatario”*, presunción que el actor confirmó al señalar a través de su declaración de parte que el endoso se realizó en el año 2018 como pago de unos trabajos relacionados con su profesión de ingeniero, declaración que, contrario a lo que alude la parte ejecutada, era del caso apreciarla en la dimensión que correspondía y darle plena significación probatoria, en este caso, respecto del cumplimiento de la ley de circulación de entrega y endoso para esa calenda, ello, a falta de una prueba idónea que desvaneciera la presunción anclada en la ley según lo hasta aquí analizado.

Es que aquí no podía la parte ejecutada simplemente quejarse de que pretendía demostrar a través de la confesión que el demandante había adquirido el título en propiedad por endoso, pero después del vencimiento, sin embargo, que éste no confesó y es que él simplemente en su interrogatorio declaró que la letra de cambio le había sido endosada en una fecha anterior al vencimiento, siendo de la carga de la prueba de la parte demandada demostrar lo contrario, pero, como no lo logró ese cometido, entonces debe afrontar las consecuencias de la ejecución a través del título valor, sin que pudiera proponer excepciones causales y personales, mismas que la Sala no puede abordar por las razones ya explicadas. Recordemos que en materia probatoria, rige en nuestra actual legislación procesal general civil el principio dispositivo, razón por la cual, ante la ausencia de pruebas que den cuenta de lo alegado por los ejecutados, no es dable al juez inferir cosa distinta a lo efectivamente demostrado y que obre en el expediente

5.7. Bajo este contexto, inane resulta descifrar si la cónyuge supérstite **María Rubiela Vallejo Galeano** –quien finalmente se allanó a las pretensiones-, es titular o no de una relación sustancial inescindible con los herederos demandados, como obligados al pago de una suma de dinero para que, por ese camino, se torne ineficaz dicho allanamiento, ya que su aceptación no provino de forma mancomunada de todos quienes conforman la parte ejecutada a voces del artículo 99.6 del C. G. del P., pues según lo elucubrado, la negociación de ese bien mercantil produjo efectos cambiarios que dejaron incólume la autonomía del título valor, lo que impide que el endosatario se vea expuesto a que le formulen las

excepciones que le podrían formular al endosante, lo que, a la postre, es lo que busca el recurrente con aquel argumento.

5.8. Lo cierto es que la señora **María Rubiela Vallejo Galeano** quiso afrontar el litigio desistiendo de las pruebas solicitadas -incluyendo la tacha de falsedad-, circunscribiéndose al derecho de que podía disponer y, ni para realizar esa solicitud o para que surta efectos en el respectivo proceso, se necesita que provenga en forma mancomunada de la parte ejecutada, puesto que el único límite que impone el artículo 175 inc. 2, concordado con el 316 del C. G. del P., es que la prueba no se haya practicado y, tratándose de la tacha de falsedad, dicha oportunidad se extiende hasta la aportación del documento -art.270 *in fine*, *ibídem*-, por lo que, en providencia que citó a audiencia concentrada, el juez con buen criterio determinó frente a la señora **María Rubiela Vallejo Galeano** “...aceptar la renuncia que hace a las pruebas que solicitó...”, (cfr. pdf. 52), aspecto que las partes dieron por zanjado al interior de la audiencia, al momento de decidir el juez “**NO REPONER la decisión de tener en cuenta el allanamiento realizado por María Rubiela interpuesto por el apoderado de ISABEL CRISTINA VILLEGAS VALLEJO**”.

6. Al respecto, aduce entonces la parte recurrente que de aceptarse el allanamiento de las pretensiones de la demanda y por ende el desistimiento de las pruebas, debió el señor Juez decretarlas de oficio, según ellos, dizque para esclarecer los hechos objeto de la presente controversia, a lo que suma argumentos sobre una sospecha de colusión entre el abogado de la parte ejecutante y la señora María Rubiela Vallejo Galeano, por la iniciación de otros procesos en contra de los herederos aquí ejecutados y por lo sorpresivo del allanamiento.

6.1. Advierte la Sala que tampoco le asiste razón al recurrente en este punto, pues el alegato que expone no pasa de ser un solitario dicho carente de respaldo probatorio en el proceso, recuérdese que el ejercicio del derecho de defensa no se materializa ni se corresponde simplemente con lanzar acusaciones que hilvanen dudas, sino que debe enfilarse a demostrar la veracidad de las excepciones o argumentos que se alegan.

6.2. Ahora, no soslaya el Tribunal que, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en sentencia T 264 de 2009: “...*El decreto oficioso de pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el*

funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia...”. Sin embargo, la interpretación de tal afirmación no se extiende hasta el punto de que sea el Juez el encargado de entablar el debate probatorio, sustituyendo así a las partes litigantes; tampoco que el juez esté obligado a atender toda insinuación de prueba oficiosa que le hagan las partes y, menos, supliendo las cargas que la misma ley le impone a cada una de ellas y que, al margen del desistimiento probatorio realizado por **María Rubiela Vallejo Galeano**, aparece latente que los restantes ejecutados no cumplieron al interior del proceso.

6.3. El artículo 167 del Código General del Proceso, establece la carga de la prueba así: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Se trata de una conducta que deben adoptar las partes para acreditar la verdad de los hechos que expusieron ante el Juzgador, pues, recuérdese, son ellas las interesadas en la prosperidad de los pedimentos, a fin de obtener su propio beneficio. Y, aunque es cierto que el papel del Juez, ni en el Código de Procedimiento Civil, ni mucho menos en el General del Proceso, es inerte, por así decirlo, sino que, por el contrario, debe contribuir a la distribución de la carga de la prueba y propender por la veracidad de los hechos expuestos por ambas partes, **tal deber probatorio no implica el favorecimiento a uno de los litigantes, ni la obligación de subsanar o enmendar las omisiones en que incurrieron aquellos.**

6.4. Sobre el tema, la Corte Constitucional, en sentencia C-086 de 2016, indicó:

“...Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes...”

6.5. Eso porque “(...) en principio, el decreto de pruebas de oficio no es un mandato absoluto que se le imponga fatalmente al sentenciador, puesto que él goza de una discreta autonomía en la instrucción del proceso, circunstancia

por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho. **Fuera de lo anterior, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador...**” (CSJ SC, 14. Feb. 1995, Rad. 4373, reiterada en CSJ SC, 14. oct. 2010, Rad. 2002-00024-01).⁶

7. Cabe indicar entonces a la parte ejecutada recurrente que su esfuerzo a lo largo de todo el proceso y así se direccionó el debate probatorio, se dirigió a desvirtuar que el demandante pudiera actuar como endosatario en propiedad, cuando en realidad tan solo era un mero cesionario, puerta que debía abrirse para por ahí mismo poder enrostrarle las excepciones causales, en cuanto los demandados no creen que el causante hubiera podido asumir una deuda por \$960.000.000 de pesos, supuestamente procedente de un “...Contrato Comercial De Arrendamiento De La Totalidad De Derechos Del Inmueble Conocido Como La Piedra Del Peñol O Peñon De Guatape Y Demas Anexidades...”, vínculo comercial que dicen “*muy probablemente es el origen del negocio causal*”, mismo que originó creación de la letra de cambio que se cobra, contrato que ellos desconocen o niegan haber existido, para blandir ese hecho como excepción causal en contra del tenedor legítimo de la letra de cambio que aquí los demandó en su calidad de endosatario en propiedad, sin embargo, omitieron demostrar previamente –como ellos lo afirman–, que éste era un simple representante del endosante, un mero cesionario o, cuando menos, que fungía desprovisto de buena fe exenta de culpa, sin que hayan atinado arrancar una confesión del demandante para mostrarlo realmente como un mero cesionario y por ahí mismo poder enrostrarle la supuesta mala fe con la cual actuaba el adquirente del título valor y de ahí que no pudiera caber en su contra las excepciones causales propuestas, carga que por entero no cumplieron los demandados, pues el proceso se encuentra huérfano de pruebas sobre el particular y por esa potísima razón es que se impone la confirmación integral de la sentencia.

7.1. De todo cuanto se ha elucubrado, es claro que los efectos del negocio jurídico no irradiaron en el endosatario, ya que la parte ejecutada no demostró lo requerido por la ley mercantil para que pudiera quedar expuesto a soportar las excepciones

⁶ CSJ. SC10291-2017. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo Radicación n.º 73001-31-03-001- 008-00374-01

causales y personales que habrían podido proponerse a su endosante, por ende, bien podía deducirse que el ejecutante adquirió un derecho originario, autónomo e independiente, lo que, por contragolpe, repercutió en la imposibilidad de formularle las excepciones derivadas del negocio causal, como bien lo planteó el juez en su sentencia, evidencia frente a la cual no se sigue otra cosa que acompañar en forma íntegra la decisión de primera instancia.

8. Las costas quedarán a cargo de la parte recurrente, tras la resolución desfavorable de su recurso.

Así, sin necesidad de más consideraciones, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado, el día 30 de agosto de 2022, dentro de la presente acción ejecutiva, de conformidad con las consideraciones en que está sustentada la presente providencia.

SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandada recurrente, para el efecto, en su momento procesal, se fijarán las respectivas agencias en derecho por el magistrado sustanciador.

TERCERO: Cumplida la ritualidad secretarial de rigor, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado



Con aclaración de voto
PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
Magistrada



Con aclaración de voto
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado